

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL

Soacha, Cund., once (11) de marzo del año dos mil veintidós (2022)

Proceso	Acción de Tutela
Exped. No.	257544003002-2022-0016
Accionante	Jorge Enrique Carreño Moreno
Accionado	Luz Marina Galindo Caro, Secretaria de Despacho Alcaldía Municipal de Soacha-Cundinamarca, Alberto Linares Guzmán, Gestor y/o Coordinador Catastro Municipal de Soacha y Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Soacha-Cundinamarca
Asunto	Fallo en primera instancia

El señor **JORGE ENRIQUE CARREÑO MORENO** incoó el trámite constitucional de la referencia, invocando su derecho fundamental de petición, señalado en la Constitución Política de Colombia.

1.1. Hechos

En resumen, señaló el accionante, que el injustificado incremento del avalúo catastral del inmueble de su propiedad por parte de la Alcaldía Municipal (más del 1000%), con el argumento que hace 12 años no se incrementaba dicho cobro y sin efectuar una visita técnica al lugar, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica; y que, el 6 de septiembre de 2021, elevó un derecho de petición ante las accionadas solicitando una revisión de la actuación.

Por lo anterior, solicita que, a través de un fallo de tutela, se ordene a las accionadas resolver su reclamación contenida en el derecho de petición elevado el 6 de septiembre de 2021, y reconocer en su favor que operó en su caso el silencio administrativo positivo, teniendo en cuenta que están por llegar las nuevas facturas de cobro de impuesto predial para el año 2022.

1.3. Actuación procesal

La acción fue instaurada **el 28 de febrero de 2022** y asignada por reparto; y admitida con auto del 1º de marzo posterior, en el que se ordenó la notificación a las partes accionante y accionada.

La titular de la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA**, en su nombre y

representación del Municipio, acudió al requerimiento efectuado por el Juzgado, solicitando negar las pretensiones de tutela por considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante.

Adujo, que esa Secretaría, a través de la Oficina con funciones de Gestor Catastral, el 3 de noviembre de 2021 notificó personalmente al accionante del contenido de la Resolución No. 25-754-00004637-2021 del 25 de octubre de esa anualidad, acto administrativo con el resolvió el trámite de rectificación de avalúo catastral, y aclaró los puntos expuestos por el accionante.

No obstante, luego de requerirse las aclaraciones del caso por parte de este Juzgado, la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN** indicó, que, por error involuntario, rindió el anterior informe sobre documentación relativa a otro asunto de su cargo, señalando que, lo correcto para el asunto de la referencia, es que la accionada respondió el derecho de petición del accionante mediante comunicación electrónica remitida el 9 de marzo de 2022, a la dirección jorgeuruen94@gmail.com.

CONSIDERACIONES

En su artículo 86, la Constitución Nacional consagró un instrumento para que las personas puedan reclamar del Estado, en forma preferente y sumaria, la protección inmediata de los derechos fundamentales consagrados en ella, cuando quiera que sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en determinadas eventualidades.

Se trata de una acción subsidiaria y eventualmente accesoria, toda vez que sólo es procedente en ausencia de cualquier mecanismo ordinario para salvaguardar tales derechos "...salvo que (...) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable", lo cual tiene desarrollo en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que especifica los eventos de improcedencia.

En repetidas ocasiones se ha dicho que el **derecho de petición** no se satisface con la simple habilitación de oportunidades para formular solicitudes respetuosas a las autoridades públicas o particulares, sino que es necesario, además, que brinden una respuesta oportuna al interesado -bien sea negativa o positiva-, la cual debe recaer sobre el mérito del asunto al que se refiere el respectivo requerimiento (C. Pol., art. 23).

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la idoneidad de la respuesta depende de que se satisfagan los siguientes requisitos: i) *Oportunidad* ii) *Deba existir resolución de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y* iii) *Deba darse a conocer al peticionario*¹. Por lo tanto, si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

El máximo Tribunal Constitucional jurisprudencialmente ha dicho en sentencia T-094 de 2016, que:

“... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.”

Por su parte, la **Ley 1755 de junio 30 de 2015**, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. *Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al*

¹ Sent. T-260 de mayo de 1997. Cfme: sentss T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, entre otras.



interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto".
..."

En lo que tiene que ver con el deber que le asiste a la respectiva entidad o autoridad receptora de **notificar la respuesta emitida al petente**, la H. Corte Constitucional ha reiterado en Sentencia T- 463 de 2011, que:

"El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta². Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental".

Frente a la **carencia actual de objeto y al hecho superado**, dijo en Sentencia T-311 de 2012, que:

"(...) cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permitan concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha cesado, por lo que, al ocurrir, se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. Al anterior fenómeno la Corte lo ha denominado como "carencia actual del objeto", el cual a su vez se puede presentar de dos maneras, esto es, por daño consumado o por hecho superado.

Y respecto del hecho superado indicó que:

"Por su parte, el hecho superado, se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela."

2.5. Problema Jurídico y Caso Concreto

Corresponde al Despacho establecer, si las accionadas han vulnerado o puesto en peligro el derecho fundamental de petición del accionante **JORGE ENRIQUE CARREÑO MORENO**, con la respuesta brindada a su solicitud radicada el 6 de septiembre de 2021.

Al respecto, se encuentra acreditado dentro del expediente digital, lo siguiente:

El 6 de septiembre de 2021, el accionante solicitó a las accionadas (Radicado 20214000306962 id: 161373) revisar la actualización catastral realizada en el

² *"En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición."*



año 2020 sobre el inmueble de su propiedad; modificar la liquidación del impuesto predial en los términos de ley; e informar puntualmente los criterios y conceptos tenidos en cuenta sobre el particular. El 28 de octubre del mismo año, el accionante solicitó a la Administración Municipal aplicar en su caso el silencio administrativo positivo, por no haber brindado una respuesta a su derecho de petición.

En el transcurso de este trámite de tutela, la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO**, acreditó que, con oficio del 2 de marzo de 2022, contestó el derecho de petición elevado por el accionante. Con este escrito, informó al petente que el avalúo catastral para el año 2021 fue revisado conforme a su solicitud, y confirmado ya que no encontró errores que lo logaran su modificación.

Explicó al accionante, que el incremento del avalúo catastral resultó al ponerlo acorde con el valor comercial sustentado en el análisis de mercado inmobiliario y en las condiciones físicas del predio, y por la aplicación de las directrices señaladas en la Resolución IGAC 070 de 2011 y demás disposiciones que regulan la actividad catastral. Así mismo, mostró al petente, cómo revisó los respectivos valores en el programa ARCGIS VISOR CATASTRAL y los métodos investigados que sirvieron de respaldo para determinar el avalúo catastral; y resaltó que la información del predio contenida en la base de datos Mi Catastro, corresponde a los datos físicos del predio para la vigencia examinada en el plenario. Finalmente anunció, que, no obstante, la encargada de modificar las liquidaciones del impuesto predial, es la Secretaría de Hacienda de Soacha-Cundinamarca, y no esa Oficina con funciones de gestor catastral.

La anterior respuesta, fue notificada al accionante el 9 de marzo de 2022, a la dirección aportada por este en el escrito de tutela.

Analizado en detalle lo anterior, puede verse que se cumple el derecho de petición del accionante, en la medida que la **SECRETARÍA** accionada resolvió su pretensión principal, cual es, revisar el avalúo catastral del inmueble de su propiedad, y explicó los argumentos técnicos utilizados para confirmar el resultado anterior, no habiendo lugar a modificar el valor de las respectivas liquidaciones del impuesto predial.



Así, puede tenerse que la respuesta brindada a la solicitud del petente dentro del trámite constitucional, cumple con su derecho de petición, pues bajo los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales señalados en pasadas líneas, basta con que la contestación o respuesta hubiere sido clara, completa, congruente y de fondo, sin que necesariamente deba satisfacer lo pedido por el petente. Así, habrá de declararse la configuración de una carencia de objeto por hecho superado, pues la acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de las personas cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular, y su prosperidad, está condicionada a que al momento del fallo subsistan los motivos que dieron lugar a que se formulara la solicitud de protección.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha-Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR por improcedente, por carencia actual de objeto por hecho superado, LA TUTELA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN solicitada por el accionante **JORGE ENRIQUE CARREÑO MORENO**.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE de esta decisión a las partes.

TERCERO: En el evento de que no sea impugnada esta decisión, para su eventual revisión remítase la actuación a la Honorable Corte Constitucional.

Notifíquese y cúmplase.

EL Juez,

RAFAEL NÚÑEZ ARIAS



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Firmado Por:

**Rafael Nunez Arias
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 002
Soacha - Cundinamarca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**7fc3b14a1e5fbf04f90d40fdf990bf42d607b1d7d03bf65ffd575ccff
e65a4bb**

Documento generado en 10/03/2022 11:59:32 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>